

Santiago, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

VISTO:

En causa Rol N°3.146 de esta Corte Suprema, comparece el abogado José Javier Garrao Álvarez, en representación de Jorge Iván, Claudia Katherin y de Verónica Beatriz, todos Beattie Ainol, deduce recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada por el 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas, con fecha 24 de julio de 2020, en juicio ordinario de mayor cuantía caratulado “Beattie con Araneda”, causa Rol C-1503-2018, que rechazó, sin costas, la demanda de nulidad de testamento cerrado interpuesta por sus representados en contra de Patricio Antonio Araneda Mena, y que tenía por objeto que se declarase la nulidad absoluta del testamento cerrado otorgado el 19 de junio de 2017, ante el Notario Iván Andrés Toledo Mora, suplente del Titular Evaldo Rehbein Utreras y que se le atribuye a doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva (QEPD), fallecida en Punta Arenas, con fecha 7 de febrero de 2018, sin cónyuge, ascendientes, descendientes, ni hermanos vivos. Esta sentencia fue confirmada por la Primera Sala de la ltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con fecha 4 de febrero de 2021, en ingreso Rol 195-2020; sentencia que fue objeto de recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto para ante la Excm. Corte Suprema, quien por resolución de fecha 30 de julio de 2021, en rol de ingreso Civil 14.558-2021, declaró inadmisble el recurso de casación en la forma y, a su vez, rechazó el recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento.

La sentencia impugnada por este recurso, finalmente, quedó firme y ejecutoriada con fecha 9 de septiembre de 2021, mediante la resolución que dictó el “cúmplase” por parte del 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas.

Fundamenta el recurso en la casual del artículo 810 n°1 del Código de Procedimiento Civil, por haberse fundado en un documento declarado falso por sentencia criminal firme y ejecutoriada, dictada con posterioridad a la fecha del fallo que se trata de rever.

Señala que el fallo que se impugna comenzó con demanda presentada con fecha 28 de agosto de 2018, en juicio ordinario en contra de Patricio Antonio Araneda Mena, con la finalidad que se declarara la nulidad absoluta del testamento cerrado otorgado el 19 de junio de 2017 por a doña Adriana Vanesa Uvara Beattie Silva (QEPD), fallecida sin cónyuge, ascendientes, descendientes, ni hermanos vivos y que fue aperturado el 22 de mayo de 2018, ante el magistrado del 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas, en causa V-29-2018, en el cual aparecía el demandado Patricio Araneda Mena, designado como heredero universal de todos los bienes de la causante, nombrándolo, además, albacea con



tenencia y administración de bienes, sin embargo, dicho documento no habría sido manuscrito por la testadora y su firma estampada sería falsa, por lo que el testamento no tiene valor alguno conforme lo dispone el artículo 1023, 1026, 1681, 1682, 1687 del Código Civil, solicitando en definitiva la nulidad absoluta del testamento cerrado, se declaren nulos todos los actos jurídicos, contratos y convenciones consecuentes, considerar al demandado como poseedor de mala fe, debiendo hacer las restituciones pertinentes a favor de los demandantes, en sus calidades de herederos ab intestado, como colaterales consanguíneos de cuarto grado de la causante, se le condene al pago de las indemnizaciones y compensaciones que correspondan y a las costas de la causa.

Que esta demanda fue rechazada por el tribunal de primera instancia, el 24 de julio de 2020, por sentencia que, en síntesis, otorgó pleno valor al peritaje judicial designado por el mismo tribunal, el que arribó a la conclusión de que la firma del testamento cerrado era genuina, lo que reforzó la convicción del sentenciador en el sentido de que habiéndose respetado las formalidades en el otorgamiento del testamento y en su apertura, la firma de la testadora es auténtica, por lo que el testamento es válido y fue confirmada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas el 4 de febrero de 2021, en Rol 14.558. Luego, contra el fallo de alzada, se interpuso recurso de casación en la forma y fondo, los que resueltos en cuenta el 30 de julio de 2021, fueron declarados, el primero, inadmisibles de conformidad con lo previsto en el artículo 781 del Código de Enjuiciamiento Civil y, el segundo, de conformidad con lo previsto el artículo 782 del mismo código, rechazado por manifiesta falta de fundamento. Con fecha 9 de septiembre de 2021, el 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas dictó el decreto que ordenó el cumplimiento de la sentencia de segunda instancia dictada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, quedando firme y ejecutoriada.

Que, en el intertanto, los demandantes dedujeron querrela criminal en contra del demandado de la causa civil -Patricio Antonio Araneda Mena-, la que fue seguida en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, RIT 2587-2018, siendo formalizado con fecha 13 de enero de 2022, por el delito consumado de uso malicioso de instrumento privado falso -testamento cerrado de doña Adriana Beattie Silva-, atribuyéndosele la participación criminal de autor directo de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N°1 del Código Penal, disponiéndose medidas cautelares personales de arraigo nacional, y fijándose un plazo de investigación de 75 días.

Que, de acuerdo con lo reseñado, se cumple con la totalidad de los requisitos legales para que el presente recurso de revisión sea acogido, ya que existe una sentencia



ejecutoriada dictada en el Juicio Civil, que se fundó en un testamento cerrado falso, el documento que fundó la sentencia impugnada está en proceso de ser declarado falso, mediante sentencia penal firme que será dictada con posterioridad al fallo que se pretende revisar; luego, la dictación de la sentencia criminal que se dicte en el Juicio Penal cambiará radicalmente el escenario que los jueces del fondo tuvieron a la vista al momento de dictar -y posteriormente confirmar- la sentencia impugnada, por haberse probado que el testamento es falso y, por tanto, se comprobará que la sentencia impugnada fue ganada injustamente al fundarse en un documento declarado falso por una sentencia criminal firme dictada con posterioridad a la fecha del fallo que se pretende rever, configurándose a cabalidad la causal de revisión del artículo 810 N°1 del Código de Procedimiento Civil.

En conclusión, solicita que se anule la sentencia impugnada por haberse fundado en un documento declarado falso por sentencia criminal firme y ejecutoriada, dictada con posterioridad a la fecha del fallo que se trata de rever, determinando que se anula todo lo obrado con posterioridad y que el proceso civil debe quedar en estado de dictarse nueva sentencia definitiva por juez no inhabilitado que corresponda, que acoja la demanda de nulidad de testamento por encontrarse acreditada la falsedad del testamento por una sentencia penal firme, con costas, o, bien resolver conforme a derecho.

Que consta a folio 22 de esta causa, que el recurrente acompañó a la causa los siguientes documentos:

- Copia de la sentencia definitiva dictada con fecha 30 de octubre de 2024, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, en autos RIT 128-2023, carpeta RUC 1810036980-6;

- Copia de sentencia dictada con fecha 8 de enero de 2025, por la Illma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en ingreso Rol 373-2024-Penal, que rechaza, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, Rit 128-2023, declarando que no son nulos la sentencia ni el juicio oral que le precedió; y

- Copia de la resolución de fecha 10 de enero de 2025, que dictó el cúmplase en causa penal.

Que, con fecha 22 de febrero de 2022, la Primera Sala de esta Corte, declaró la admisibilidad de la acción de revisión, disponiendo la suspensión de la tramitación hasta que se dicte sentencia firme en la causa penal ya mencionada.

Que, a folio 34, comparece el abogado Álvaro Fernando Sandoval Tapia, en representación del demandado Patricio Antonio Araneda Mena, solicitando se rechace el



recurso de reposición deducido en contra de la resolución dictada por esta Corte, que declaró inicialmente inadmisibile el presente recurso de revisión y hace presente que el testamento, además de declarado falso, debe ser decisivo, gravitante y debe haber servido de base a la sentencia impugnada, lo que no sucedería en este caso, ya que no se debe olvidar que hubo en sede civil sendos peritajes de ambas partes y, además, señala que no se indicaría como un supuesto uso malicioso de instrumento público o privado puede incidir en la sentencia que se busca rever.

Que, con fecha 16 de abril de este año, a folio 41, informa el Fiscal Judicial Sr. Jorge Pizarro Astudillo, quien es de parecer que el presente recurso de revisión es procedente por la causal prevista en el artículo 810 N°1 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto concurren los requisitos que son la esencia de lo estatuido en el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil, a saber: “En primer lugar, del análisis de la sentencia de primera instancia del proceso civil ROL C-1503-2018, se desprende que el testamento cerrado presuntamente suscrito por la Sra. Beattie Silva, de fecha 19 de junio de 2017, es el documento fundante de aquélla, debido a que la acción deducida decía relación, precisamente, con la nulidad de dicho instrumento. Luego, el mentado testamento fue analizado en el contexto de la causa penal que se siguió en contra del presunto heredero instruido, Patricio Antonio Araneda Mena. De la revisión de la sentencia penal, que fue dictada con fecha 30 de octubre de 2024, en el proceso RIT 128-2023 RUC 1810036980-6, por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, consta que el imputado fue condenado como autor del delito consumado de uso malicioso de instrumento público falso. En dicha sentencia, se establecieron como hechos probados los que se indican en el considerando noveno, consignándose en el numeral 9° que la firma estampada en el testamento no corresponde a la causante doña Adriana Beattie Silva, siendo, en consecuencia, falsa. Consta, además, que la sentencia dictada en sede penal fue pronunciada con posterioridad al momento en que quedó firme y ejecutoriada la sentencia civil que se busca invalidar por esta vía, atendida las fechas que se registran en cada una de ellas: 30 de octubre de 2024 y nueve de septiembre de 2021, respectivamente. De la revisión del fallo del recurso de nulidad penal, así como del decreto que ordena el cumplimiento de la sentencia por el tribunal de base, consta que el pronunciamiento penal se encuentra firme, produciendo el efecto de cosa juzgada. A partir de lo analizado y expuesto, en la especie se verifica el supuesto regulado en la causal invocada, esto es, la del numeral 1° del artículo 810 del código adjetivo, debido a que la sentencia dictada en el proceso civil, en cuanto rechazó la acción de nulidad absoluta de testamento, se basó en dicho preciso documento, el que, de



manera posterior, fue declarado falso por una sentencia penal firme y ejecutoriada. Además, la falsedad de dicho instrumento incide de manera esencial en el pronunciamiento civil, debido a que la falta de establecimiento de la referida falsedad constituyó el fundamento para el rechazo de la acción, según se advierte de la lectura del fallo civil. En cuanto a las alegaciones vertidas por el demandado en sede civil y condenado en sede penal, considera este Fiscal Judicial que no permiten arribar a una conclusión distinta, en atención a que la dictación de una sentencia condenatoria por el uso malicioso de un instrumento público falso envuelve necesariamente el pronunciamiento respecto a la falsedad de aquél, lo que resultó establecido en la sentencia penal, como fue referido anteriormente. Por otro lado, la existencia de peritajes en el proceso civil no convierte al instrumento en cuestión en un antecedente no decisivo, en atención a que, como ya se indicó, el testamento consistía en el objeto del pronunciamiento que se pretendía obtener a través de la acción de nulidad, por lo que la determinación posterior de su falsedad resulta gravitante para determinar la concurrencia de la causal, y justificar la declaración de la nulidad del fallo civil, como se sugerirá a continuación. En consecuencia, este Fiscal Judicial es de opinión que US. Excma., si es de igual parecer, declare procedente la revisión deducida mediante el recurso de folio 1, conforme lo dispone el artículo 810 N°1 del Código de Procedimiento Civil, por haberse comprobado conforme a derecho el supuesto en que se funda y, en consecuencia, disponga anular la sentencia definitiva dictada con fecha 24 de julio de 2020 por el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, en procedimiento ordinario en causa Rol C-1503-2018, y ordene dejar sin efecto todo lo obrado con posterioridad a aquella, reponiendo la tramitación al estado de dictarse sentencia por juez no inhabilitado”.

Con fecha 30 de mayo reciente, se procedió ala vista de la causa, alegando el abogado señor Garrao Álvarez por el recurso.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en estos autos se ha intentado recurso de revisión, argumentando la parte que impugna, que el fallo dictado en los autos sobre juicio ordinario seguido ante el 2° Juzgado Civil de Punta Arenas, Rol 1503, “Beattie/Araneda”, se fundó en un documento declarado falso por sentencia firme dictada con posterioridad a aquella que se trata de rever.

SEGUNDO: Que nuestro ordenamiento jurídico concede a las partes de un proceso judicial de naturaleza civil la posibilidad de impetrar una acción de revisión con el objeto de que la Corte Suprema revea una sentencia firme; posibilidad que se encuentra regulada en



el artículo 810 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, siendo ésta una acción de carácter excepcional que, de prosperar, permite conocer nuevamente un determinado asunto que ya fue resuelto por sentencia firme.

Que, en la especie, lo que esta acción busca es la declaración de ineficacia de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, fundada en los motivos particulares que establece el ordenamiento jurídico que hacen posible impetrar este recurso, es decir, el objetivo de la acción de revisión en el ámbito del proceso civil está dada por constituir una técnica o instrumento procesal dirigido contra una sentencia que se ha obtenido por medios ilícitos o fraudulentos, mediante la cual la seguridad jurídica cede a favor de la reivindicación de la justicia de la decisión. (De Migue en “Prólogo” a CALVO (1977), p. 11).

TERCERO: Que siendo la norma general en nuestra legislación el respeto a la cosa juzgada y el cumplimiento de lo resuelto en sentencia firme, las disposiciones sobre revisión de sentencias que han adquirido dicho carácter constituyen reglas de excepción, que tienen aplicación limitada a los casos taxativamente señalados en ellas, como ocurre en el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil, que permite incoar la acción de revisión cuando se funda en alguna de las siguientes causales: 1°. Si se ha fundado en documentos declarados falsos por sentencia ejecutoria, dictada con posterioridad a la sentencia que se trata de rever; 2°. Si pronunciada en virtud de pruebas de testigos, han sido estos condenados por falso testimonio dado especialmente en las declaraciones que sirvieron de único fundamento a la sentencia; 3°. Si la sentencia firme se ha ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia haya sido declarada por sentencia de término; y 4°. Si se ha pronunciado contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y que no se alegó en el juicio en que la sentencia firme recayó.

CUARTO: Que, y no obstante lo anterior, es dable señalar que, adicionalmente, el inciso final del artículo 810 del Código de Procedimiento Civil, exige para que el recurso de revisión pueda prosperar, que la determinación que se pide examinar no haya sido pronunciada por la Corte Suprema conociendo en los recursos de casación o de revisión.

QUINTO: Que en razón de lo anterior y antes de entrar al fondo del asunto a resolver, vale la pena recordar que, si bien el principio general en virtud del cual la Corte Suprema, gozando de la superintendencia directiva, correccional y económica que posee, debe conocer de todos los recursos que se deduzcan ante ella y la limitación del legislador, en orden a que no procede revisión contra aquellos pronunciamientos que son consecuencia del conocimiento que hace el tribunal superior de un recurso de casación o de revisión, se entiende, desde que ambos son recursos extraordinarios de nulidad y,



consecuencialmente, realizan un control de validez del proceso. Enseguida, si un asunto ha sido declarado legítimo por la Corte Suprema, o bien, se ha invalidado y se ha dictado sentencia de reemplazo, seria inconsistente que le estuviese permitido, a ese mismo tribunal, anularlo por sentencia posterior.

SEXTO: Que siguiendo en la misma línea argumentativa anterior y rescatada desde la jurisprudencia de este máximo tribunal (ROL N 76.216-2020, 1° Sala Corte Suprema), debe consignarse que si bien consta que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas -y que incide en el juicio ordinario que se pretende revisar- fue objeto de recurso de casación en la forma y en el fondo por la parte demandante, del examen de la resolución emitida en su oportunidad por esta Corte Suprema, con fecha 30 de julio de 2021, se advierte que ambos recursos no prosperaron, ya que en relación con el recurso de casación en la forma, fue declarado inadmisible de acuerdo con lo previsto en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, pues el fallo no carecía de las consideraciones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento, y, a su vez, de conformidad con lo previsto el artículo 782 del mismo cuerpo legal señalado, se rechazó el recurso de casación en el fondo, por manifiesta falta de fundamento, señalando que no se denunció de modo eficaz la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba, por lo que no resultaba posible alterar los hechos del pleito. Por consiguiente, habiéndose declarado inadmisibile “in limine” el recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de fundamentos, al no haberse dado en el por conculcadas normas decisorias, procede concluir que esta Corte no emitió un pronunciamiento de fondo sobre el asunto y este aserto conduce a colegir de manera consecuencial que en el caso sublite no hay impedimento alguno para conocer de la presente acción de revisión.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, se hará el análisis respecto del fondo del recurso de revisión deducido.

A saber, el presente recurso de revisión se ha planteado presentado aduciendo el vicio establecido en el número 1 del artículo 810 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haberse fundado en documentos declarados falsos por sentencia ejecutoriada, dictada con posterioridad a la sentencia que se trata de rever.

OCTAVO: Que para que proceda la señalada causal, es necesaria su acreditación, para lo cual se requiere que la sentencia que se pretende invalidar se haya fundado en documentos declarados falsos, lo que importa el ejercicio de una acción civil o penal que tenga por objeto obtener la declaración de falsedad de determinados documentos y, por



otra parte, que esa sentencia que declara la falsedad de los documentos debe encontrarse firme y haber sido dictada ulteriormente a la sentencia objeto de la acción de revisión.

NOVENO: Que para acreditar que la sentencia que se pretende invalidar se ha fundado en documentos declarados falsos -lo que importa el ejercicio de una acción civil o penal que tenga por objeto obtener la declaración de falsedad de determinados documentos-, bastará con que el recurrente acredite que los documentos públicos o privados que sirvieron de fundamento a la sentencia que se pide revisar fueron declarados falsos por otra sentencia firme dictada con posterioridad.

Al efeto, se acreditó mediante sentencia acompañada a folio 22, que en causa seguida en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, Rol 128-2023, se dictó sentencia definitiva con fecha 30 de octubre de 2024, en la cual se condenó a Patricio Antonio Araneda Mena (demandado en causa civil que se revisa), por la participación que tuvo en calidad de autor del delito de uso malicioso de instrumento público falso, cometido el 9 de junio de 2017, a la pena de 54 días de presidio menor en su grado medio y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Que la sentencia penal referida, en su motivo NOVENO tuvo por acreditado lo siguiente: *“9° La firma estampada en el testamento no corresponde a la causante doña Adriana Beattie Silva, siendo en consecuencia, falsa. Resultan particularmente clarificadores en este sentido los peritajes realizados por Janira Acuña Soto, Daniel Puentes Pérez y el metaperitaje de Ligia Cárdenas Ponce, en efecto, y sin perjuicio que se volverá sobre este punto, la firma estampada en la minuta del testamento cerrado difiere sustancialmente de la rúbrica de doña Adriana Beattie Silva...”*. Continúa la sentencia del Tribunal penal: *“Según la primera perito, «...llegó a la conclusión que la firma es falsa del tipo servil ejercitada», esto en sus propias palabras «...implica que la persona practica varias veces hasta que de acuerdo con su propio criterio la realiza de forma óptima». En efecto, se puede advertir, y se explicó en el peritaje, que existen marcadas diferencias entre la firma indubitada de la causante, y aquella que se contienen en el testamento...”*. *“... Como se indicó, y a propósito de la postura de la defensa, se analizará con mayor detalle este informe pericial, aunque es dable destacar que la perito informa que: «Existen diversas clasificaciones de falsedad de firma, el que sea Servil ejercitada implica que la persona practica varias veces hasta que de acuerdo con su propio criterio la realiza de forma óptima». La profesional realizó además un «Análisis grafométrico, en donde se advierte angulación de las firmas indubitadas, ellas tienen un ángulo de escritura entre 84,5° y 86°, ella -la señora Beattie- siempre se mueve en ese patrón de movimiento, pero en la firma*



dubitada el patrón es de 78°, alejándose del espacio del abanico que predominantemente presentan las firmas indubitadas». «...La conclusión de la falsedad de la firma también se desprende del peritaje del Sr. Puentes, quien concluye que «Es posible advertir que en las firmas rotuladas como E-2 (minuta testamentaria) y E-3 (carátula del testamento) se utilizó un elemento esferográfico de tinta pastosa de color azul, sin embargo, existe disímil idea de construcción y trazado conforme a su composición». Este perito añade que «Las firmas mantenían en tiempos de construcción en 6 tiempos (enlaces o unión de cada firma), la diferencia es en la habilidad, en una mayor habilidad y en la otra no, ya que hay “tembloridad” en su confección E-2 no tenía la misma habilidad, se ve en el trazo y en la ornamentación de la firma, hay un disímil de ideas de confección entre las dos...». Finalmente señala la sentencia penal: “...se puede concluir que el peritaje realizado en sede civil por el Sr. Ricardo Navarrete, no cumplió estándares científicos mínimos para llegar a la conclusión contraria, esto es, que la firma de la minuta testamentaria correspondía a la señora Adriana Beattie; esto se puede advertir claramente de su propia lectura, de la declaración entregada por el señor Navarrete como testigo, y por sobre todo, por el informe pericial realizado por la perito Ligia Cárdenas, que refiere concluyentemente que: «...arribó al dictamen que el informe caligráfico no sirve de apoyo para el juez ya que tiene inconsistencias y omisiones relevantes, el dictamen no se corresponde con la metodología que debería haber seguido y por ende presenta inconsistencias en su conclusión»”.

Y luego, la sentencia se hace cargo de la participación del querellado y determina en el considerando DÉCIMO CUARTO que “Al acusado le ha correspondido participación en calidad de autor en los hechos señalados, toda vez que, para acreditar que fue él quien usó el documento falso con conocimiento de que la firma, se contó con la abundante prueba de cargo ya referida, que permitió más allá de toda duda razonable, determinar que el contenido de este testamento falso fue empleado por él en su favor, y en desmedro de los sobrinos Jorge, Verónica y Claudia todos de apellido Beattie”.

DÉCIMO: Que, ahora, en cuanto a acreditar que la sentencia que declara la falsedad de los documentos debe encontrarse firme y haber sido dictada ulteriormente a la sentencia definitiva objeto de la acción de revisión; efectivamente, la sentencia definitiva que declara falso el testamento -documento fundante de la acción de nulidad- fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, con fecha 30 de octubre de 2024, la que quedó firme y ejecutoriada el día 10 de enero de 2025, de lo que se puede advertir, que su pronunciamiento fue, al menos, cuatro años después de la sentencia



definitiva del proceso civil que se pretende rever (24 de julio de 2020 -sentencia de primera instancia civil- a 30 de octubre 2024 -sentencia de primera instancia penal-).

UNDÉCIMO: Que, acreditada la configuración de la causal legal, corresponde a este máximo tribunal calificar el nexo o relación de causalidad entre los hechos constitutivos de la causal y la justicia de la decisión.

Para la determinación de lo anterior, es necesario confrontar si el documento declarado falso (testamento cerrado) ha sido decisivo, gravitante o dotado de tal significación que sirvió de base para el pronunciamiento de la sentencia impugnada. Es decir, es necesario calificar jurídicamente cómo los hechos que constituyen la causal invocada pueden influir en la justicia de la sentencia definitiva firme objeto de la impugnación.

DÉCIMO SEGUNDO: Que de los antecedentes de la causa civil cuyo fallo se solicita revisar, pronunciada en los autos Rol 1503-2018, del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, sobre juicio ordinario de nulidad absoluta de testamento cerrado, aparece que la determinación que hace el juez de primer grado, basado en la supuesta validez del testamento, fue la causa determinante, exclusiva y fundante de la decisión de la sentencia que se impugna.

A saber, la sentencia civil en su motivo DÉCIMO SEGUNDO señala: “***Que se ha demandado a objeto se declare la nulidad de un testamento cerrado, por falsificación de la firma de la testadora***” (el realce es nuestro), es decir, el objeto del juicio recae en la determinación de la validez o no del testamento cuya ineficacia se demanda; así también consta a folio 22 cuando se recibió a prueba, fijándose como hechos sustanciales, controvertidos y pertinentes los siguientes: 1. Efectividad que la firma estampada en el testamento cerrado de la causante doña Adriana Beattie Silva, es falsa. 2. Efectividad que el demandado don Patricio Araneda Mena, se encuentra de mala fe.

Luego, en el considerando DÉCIMO SÉPTIMO, el juez del grado señala: “Que en el marco de la cuestión litigiosa se ordenó un peritaje judicial **con el fin de determinar la falsedad imputada en la demanda.** (el ennegrecido es nuestro).

Que, al efecto, el juez analizó la pericia designada por el tribunal, prueba con la que arribó a la conclusión que la firma del testamento es genuina, y determinó en el motivo DÉCIMO OCTAVO: “... la firma de la testadora es auténtica, por lo que el testamento es válido”, por lo que, en definitiva, en el motivo VIGÉSIMO, el sentenciador expresa: “Que todo lo razonado lleva a rechazar la demanda en cuanto pedía se declarara nulo el testamento”.



DÉCIMO TERCERO: Que, de lo expuesto precedentemente y lo señalado en el motivo noveno párrafo segundo en delante de esta sentencia, puede apreciarse que la antedicha sentencia civil, fue ganada injustamente por el demandado, a través de un fraude procesal, el que fue desconocido durante el enjuiciamiento y que se configura solo en virtud de la sentencia definitiva firme que así lo declaró. En palabras del autor Andrés Ciurana: “los hechos y las conductas que motivan la revisión no han de constar en autos o deducirse de ellos y no han de ser conocidos por la parte que pide la rescisión de la sentencia. Esta característica de la novedad es la que convierte un determinado vicio, que, de ser conocido durante la pendencia del proceso, constituiría una infracción invalidante, en motivo de revisión si se descubre tras la firmeza de la sentencia y tiene incidencia en la resolución” (ANDRÉS (2005), p. 489.).

DÉCIMO CUARTO: Que se ha determinado que el testamento consistía en el objeto del pronunciamiento que se pretendía obtener a través de la demanda de nulidad en sede civil, acción que fue rechazada por considerar, en su momento, que dicho instrumento no era falso, sin embargo, acreditándose que la sentencia civil se dictó fundada en un documento falso -testamento cerrado-, pues por sentencia penal firme y ejecutoriada dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Punta Arenas, de manera posterior, se declaró falso dicho documento y, además, se estableció que en dicha calidad fue utilizado para cometer el delito de uso malicioso de instrumento público falso por el demandado, queda claro que dicha falsedad incidió de manera esencial en el pronunciamiento civil, por lo que, se hará lugar al recurso en examen, pues la determinación posterior de la falsedad del testamento, resulta gravitante para determinar la concurrencia de la causal, y justificar la declaración de la nulidad del fallo civil, tal y como ha sido informado también por la Fiscalía Judicial de esta Corte.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 810 N 1, 811 y 815 del Código de Procedimiento Civil, **SE ACOGE** el recurso de revisión deducido por el abogado José Javier Garrao Álvarez, en representación de Jorge Iván, Claudia Katherin y de Verónica Beatriz, todos Beattie Ainol y, consecuentemente, se declara **NULA LA SENTENCIA** dictada el 27 de julio de 2020, por el Juez del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, en juicio ordinario Rol N° C-1503-2018, caratulado “BEATTIE/ARANEDA”, y se deja sin efecto todo lo obrado en dicha causa con posterioridad a ella, reponiéndose su tramitación al estado de dictarse sentencia por juez no inhabilitado.

Redacción a cargo de la ministra (S) Sra. Dobra Lusic Nadal.

ROL N° 3146-2022.-



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada el Ministros Sr. Mario Carroza Espinoza, Ministra María Teresa Letelier Ramírez, Ministro (s) Sr. Hernán González García, Ministra (s) Sra. Dobra Lusic Nadal y Ministra (s) Eliana Quezada Muñoz. No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firman el señor Carroza y el señor Gonzalez, por encontrarse con permiso, el primero, y por haber concluido su periodo de suplencia, el segundo. Santiago, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.



En Santiago, a dieciocho de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

